

UN “PLAN MARSHALL” PARA AMERICA LATINA

Henry Kissinger

EL MAS IMPORTANTE ACONTECIMIENTO de la reciente *cumbre* de las democracias industriales, celebrada en Bonn, no fue adecuadamente analizada por los gobiernos allí presentes ni recibió la cobertura informativa que merecía. Se trata de la carta firmada por 11 jefes de Gobierno de los principales países de Latinoamérica, en la que se solicitaba ayuda a los reunidos, habida cuenta de que los “graves problemas” de la crisis latinoamericana no pueden ser resueltos únicamente por las naciones que los padecen.

La respuesta de las democracias industriales fue protocolaria y evasiva. Se felicitaban, simplemente, por el hecho de que los problemas de la deuda latinoamericana “aunque lejos de estar resueltos, se están tratando con flexibilidad y de forma efectiva”.

En lenguaje corriente, esto no quería decir más que los países reunidos en Bonn no iban a adoptar ningún tipo de acción de carácter gubernamental. La reiteración, sin embargo, de consignas familiares no puede cambiar la realidad de los hechos, a saber que cuando los presidentes de los principales países latinoamericanos hacen oír su voz de forma conjunta y son ignorados, están amenazadas las relaciones políticas a largo plazo en el hemisferio occidental.

¿A qué crisis se están refiriendo estas naciones? Para Estados Unidos y para la mayoría de las democracias industriales, el problema no es otro que el excesivo endeudamiento de estos países de Latinoamérica, que pretende ser resuelto, por parte de las democracias occidentales, mediante métodos financieros tradicionales. Pero para los vecinos del sur de Estados Unidos, la cuestión representa nada menos que la supervivencia de sus instituciones políticas. La Administración estadounidense se ha felicitado repetidamente por la expansión de gobiernos democráticos en Latinoamérica.

Pero la pregunta clave, a este respecto, es si estas democracias pueden sobrevivir frente al dramático deterioro del nivel de vida que les es impuesto, y si la falta de esperanza de salir de esta situación no podría generar un populismo que rechace tanto la libre empresa como las relaciones de cooperación del hemisferio occidental, y esto incluso antes de que las tendencias del mercado, sobre las que se basa una teoría económica ortodoxa, pueda ofrecer las inversiones necesarias para el desarrollo. Una vez que el proceso de radicalización haya comenzado, es más probable que incluso una política constructiva estadounidense lo acelere que el que se produzca el proceso contrario.

Si Estados Unidos espera demasiado tiempo, se dará cuenta de lo peligroso que resulta fijar la atención tan solo en las presiones populistas o contrarias al libre mercado. Si esto llegase a ocurrir, los Estados Unidos se encontrarían en una situación política defensiva en su propio ámbito geográfico y, ciertamente, su presencia en el resto del mundo entraría en declive, al igual que su capacidad para concebir una política global creativa.

No es por casualidad que Fidel Castro se haya referido recientemente a la crisis provocada por la deuda latinoamericana en lo que, para él, son términos

relativamente moderados. Fidel Castro contempla este problema como una oportunidad para erigirse en el portavoz de un agravio compartido. Ser el paladín de la causa de los países latinoamericanos endeudados permite a Castro, al mismo tiempo, conseguir una respetabilidad en la zona y proseguir su tarea revolucionaria minando las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos del sur.

Ignorar o trivializar el llamamiento de los 11 presidentes latinoamericanos es, por tanto, extremadamente peligroso. En Brasil y Argentina, tan sólo el pago de los intereses acumulados es probable que represente al menos el 45% de los ingresos obtenidos de las exportaciones; en cuanto a México esta cifra se sitúa justo por debajo del 40%. Esto nos conduce al resultado paradójico de que la conversión de países en vías de desarrollo en países desesperados y sin salida pasa por las inversiones que realizan los exportadores de capital.

No discuto la validez que, en términos financieros, pueda tener este análisis. Lo que pongo en cuestión es su prudencia y viabilidad políticas. Los gobiernos latinoamericanos, en su mayoría, han respondido a la crisis con valentía y resolución: un buen ejemplo de esto lo constituye el drástico programa de reformas recientemente anunciado por el presidente argentino, Raúl Alfonsín. Pero no son los bancos ni las entidades financieras internacionales los que, fundamentalmente, han originado el fracaso de las negociaciones sobre la deuda latinoamericana. Tales instituciones han llegado al límite de lo que, con sus condicionantes particulares, organismos financieros de este tipo pueden aceptar, o de lo que las propias normas de las entidades internacionales pueden permitir.

Las acciones emprendidas por Estados Unidos en aquella ocasión delimitan con claridad el marco de actuación: para preservar la democracia en Europa occidental, para vencer la desesperanza y ofrecer una salida, Estados Unidos llevó adelante el *plan Marshall*.

Con respecto a Latinoamérica, muy diferente es la actitud actual de Estados Unidos y del resto de las democracias industriales. Las cuestiones que son cruciales, de vida o muerte, para los gobiernos democráticos recientes son manejadas por banqueros y funcionarios internacionales, quienes, por muy perspicaces que sean, nunca tienen la suficiente autoridad ni la experiencia bastante como para diseñar relaciones de carácter político.

La aún reciente democracia argentina se encuentra en una posición comparable. El Gobierno recibe presiones tanto de los militares, recientemente apartados del poder, como de los peronistas con su récord de libertinaje, basado en empresas públicas y en una actitud antiestadounidense latente.

En concreto, mis propuestas son:

1) Estados Unidos y otras democracias industriales deberían establecer un organismo para el desarrollo del hemisferio occidental, abierto a los países acreedores y deudores de Latinoamérica, con un plazo de tiempo fijado para las tareas a realizar, de cinco a siete años, por ejemplo. Para reducir el impacto presupuestario que representaría la creación de este organismo, la financiación del mismo podría llevarse a cabo gracias al crédito de las democracias industriales para conseguir fondos en los mercados internacionales de capitales, de forma que un dólar de capital suscrito pudiera, de hecho,

servir de aval para la consecución de más dólares para nuevos créditos. De esta forma, se prestaría, no se daría gratuitamente, una herramienta a aquellos países en vías de desarrollo que participasen en el programa. Para impedir que el coste de los nuevos intereses incrementase excesivamente el volumen de la deuda, los fondos se prestarían a un tipo de interés bajo y fijo. Cualquier diferencia que se produjese entre el coste del plan de préstamos y este tipo de interés se añadiría al principal y sería reembolsado mediante un nuevo plan de pagos.

2) Los países deudores deberían tener la oportunidad de participar, país a país, con condiciones adecuadas a sus circunstancias específicas. El incentivo, en este caso, será el darse cuenta de que ésta puede ser su última y, ciertamente, mejor oportunidad para conseguir el objetivo de un crecimiento autónomo. La mayoría de las reformas que ahora exige el Fondo Monetario Internacional son, en realidad, esenciales para conseguir la recuperación económica. La dificultad estriba en que el tiempo que se concede para la realización de estas reformas es demasiado corto como para permitir la edificación de la infraestructura requerida para llevarlas a cabo. Tales programas de reforma obligan a que economías altamente dependientes de los préstamos exteriores y de las importaciones se ajusten, en un plazo de meses, a inferiores niveles de dependencia en los dos sentidos. El choque que se produce por esta circunstancia se traduce en recesión, convulsiones políticas y amenazas para unas relaciones constructivas a largo plazo entre los países industrializados y los países deudores.

3) También deben ofrecer su contribución los países acreedores. Las instituciones acreedoras, a cambio de que se les garantice el marco que haga posible el pago real y a largo plazo de la deuda, deberían ponerse de acuerdo en un tope con respecto a los intereses, que incluya el precio que se exija para los pagos renegociados. El tipo preferente de interés podría ser establecido de acuerdo con la tasa de inflación más la tasa de los intereses históricos reales que, durante un siglo más o menos, ha oscilado en torno a un 3%. Según el plan de préstamos para el desarrollo del hemisferio occidental, el país deudor debería hacerse cargo de pagar la diferencia entre esa cifra y los tipos de interés actuales, cuya tasa está en disminución en cualquier caso, en divisa local. Como alternativa, esto podría añadirse al principal pendiente de pago.

Al igual que no puede esperarse que haya una paz duradera si las relaciones Este-Oeste se reducen tan sólo a conversaciones sobre armamento nuclear, tampoco puede haber una esperanza para la cooperación Norte-Sur, si las discusiones se limitan a periódicas reuniones para solucionar cada crisis que se produzca por atrasos en el pago de los intereses correspondientes. La verdadera prueba de vitalidad de una política exterior consiste en saber si ésta puede dar lugar, como un acto voluntario de creación, a lo que, de otro modo, se impondría por medio de crisis y caos. Y la necesidad más apremiante, en lo que se refiere a las relaciones entre las democracias industriales y las naciones deudoras, especialmente entre los Estados Unidos y Latinoamérica, es restaurar la esperanza para las nuevas y, a menudo, frágiles democracias del sur.

(Tomado de El País, julio 10. de 1985)

Junio 23 de 1985